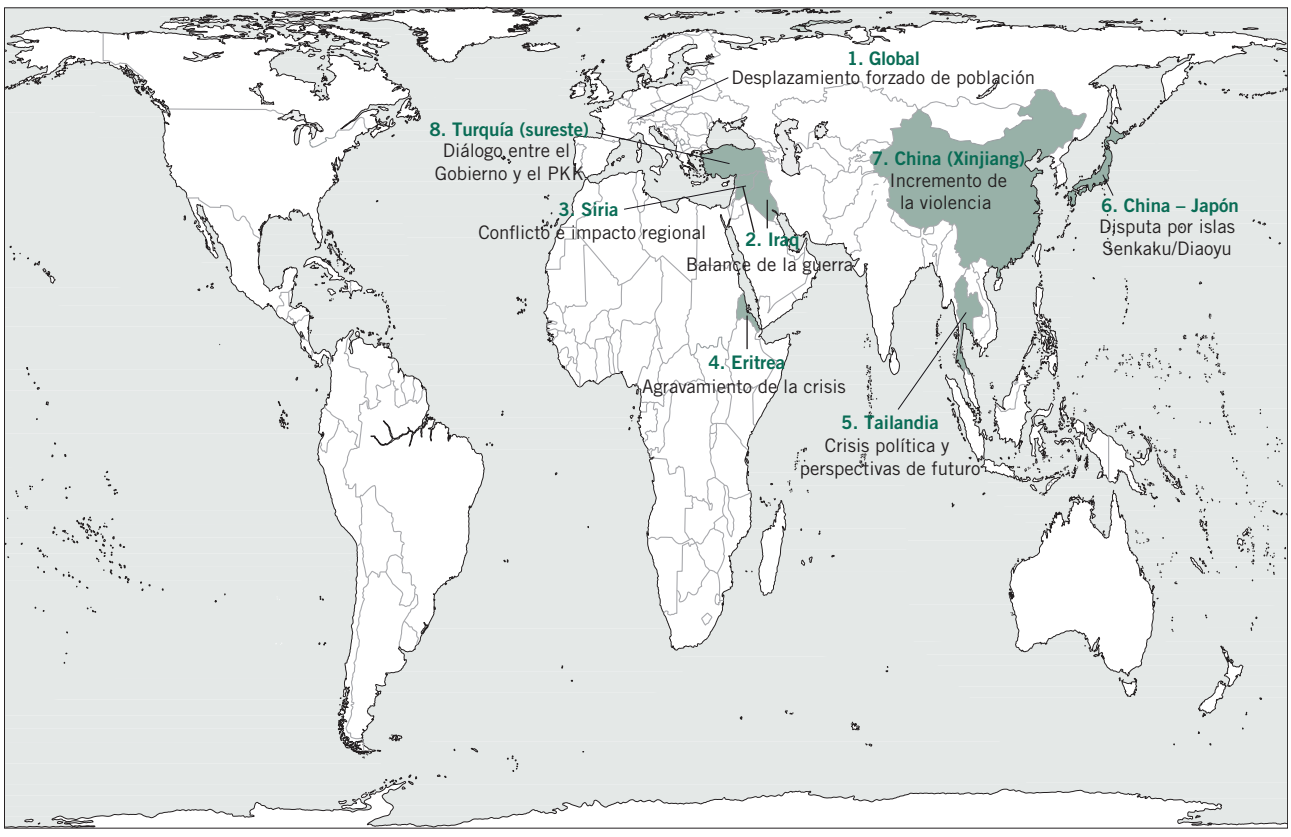
6. Escenarios de riesgo para 2014

A partir del análisis del año 2013 de los contextos de conflicto y tensión, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo ocho escenarios que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2014. Los factores de alerta de cara al año 2014 hacen referencia al desafío que supone a escala global el aumento del desplazamiento forzado de población, en su peor nivel desde los años noventa; al devastador balance de una década de guerra en Iraq, país que enfrenta además una creciente convulsión; a la internacionalización y radicalización del conflicto en Siria y su impacto desestabilizador a nivel regional; al perceptible agravamiento de la situación en Eritrea cuya implosión podría tener consecuencias imprevisibles; a la crisis política que ha atravesado Tailandia en la última década, que puede empeorar en el futuro; a las consecuencias de la disputa entre China y Japón por las islas Senkaku/Diaoyu y el juego de poder en Asia Oriental; al incremento de la violencia en la provincia china de Xinjiang; y, por último, al difícil encaje que tiene el diálogo entre Turquía y el grupo armado kurdo PKK en medio de la crisis interna que atraviesa Turquía y de la inestabilidad regional en el contexto de Oriente Medio.

Mapa 6.1. Escenarios de riesgo para 2013



6.1. Desafío global: desplazamiento forzado de población en su peor nivel desde los noventa

Los conflictos armados, las situaciones de violencia generalizada y los abusos a los derechos humanos provocan el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas cada año. Muchas abandonan sus hogares y se instalan en otras regiones dentro de sus propios países (desplazamiento interno) y otras atraviesan las fronteras en busca de protección (refugio). A excepción de años específicos en los que se ha observado un ligero descenso de este fenómeno, la tendencia general de la última década apunta a un sostenido incremento de los desplazamientos de población a causa de la violencia. Las últimas cifras globales correspondientes a 2012, dadas a conocer por la Agencia para los Refugiados de la ONU (UNHCR/ACNUR) a mediados de 2013, confirmaron este patrón y encendieron una alerta: las cifras de desplazamiento forzado habían llegado a su peor nivel desde mediados de los noventa[1]. A finales de 2012, un total de 45,2 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento –15,4 millones de refugiados; 28,8 millones de desplazados internos; y casi un millón de solicitantes de asilo–, la cifra más alta desde 1994, cuando la cifra de personas desplazadas alcanzó los 47 millones. Las cifras son igualmente alarmantes si en vez de contabilizar el total acumulado de personas que padecen esta situación se tienen en cuenta las que por primera vez se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia. Según los datos de ACNUR referentes a 2012, durante ese año un total de 7,6 millones de personas se desplazaron como consecuencia de conflictos o situaciones de persecución. De ellas, 1,1 millones se convirtieron en refugiados –la mayor cifra de nuevos refugiados desde 1999–, mientras que otras 6,5 millones se desplazaron dentro de las fronteras de sus países, la segunda cifra más alta de la última década. O, como señala ACNUR a modo ilustrativo, durante 2012 un promedio de 23.000 personas al día tuvieron que dejar sus hogares debido a situaciones de violencia.

A finales de 2012, un total de 45,2 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado, la cifra más alta desde 1994. En promedio, durante 2012 cerca de 23.000 personas al día tuvieron que dejar sus hogares debido a situaciones de violencia

El agravamiento de la situación de desplazamiento forzado hasta niveles similares a los observados en los noventa –época que ha quedado marcada en la memoria colectiva por graves crisis humanitarias derivadas de guerras como las de la ex Yugoslavia, Rwanda y Sierra Leona, entre otras– fue vinculado en 2012, en parte, al impacto específico de algunos conflictos que tuvieron graves efectos desestabilizadores, principalmente en África y Oriente Medio. Entre ellos, el que afecta a la RD Congo, el que se inició en el norte de Malí a principios de 2012, las hostilidades en la zona fronteriza entre Sudán y Sudán del Sur –que motivaron que más de un millón de personas buscaran refugio en países vecinos ese año–, o la guerra en Siria. El deterioro de algunos de estos conflictos y la emergencia de nuevas crisis en 2013 permiten augurar que las cifras continuarán reforzando la tendencia negativa en la evolución global del desplazamiento forzado de población. Para ello, basta con tener en cuenta la situación en algunos contextos como el de la R. Centroafricana, donde la convulsión derivada de la toma del poder por la fuerza en marzo de 2013 motivó masivos desplazamientos internos –más de 400.000– y obligó a más de 220.000 personas a buscar refugio en países como Chad, Camerún, República del Congo y RD Congo. En este último país, la persistencia del conflicto en la zona este continuó forzando a miles de personas a huir de sus hogares, elevando la cifra total de desplazados internos a 2,6 millones de personas según los balances de ACNUR hasta mediados de 2013. En la región sudanesa de Darfur, la reanudación de los enfrentamientos intercomunitarios motivó nuevos desplazamientos, que en los primeros meses de 2013 ya sumaban 300.000 personas.

A estos casos hay que añadir la gravísima situación en Siria, donde las cifras de desplazamiento forzado aumentaron exponencialmente en 2013 ante la brutalidad de las dinámicas de violencia. Si a principios de año los desplazados internos sumaban 3,5 millones de personas, a finales de 2013 esta cifra había aumentado hasta alcanzar los 6,5 millones.[2] La cifra de población refugiada, en tanto, oscilaba entre 1,8 y 2,3 millones de personas, la mayoría de las cuales buscaron refugio en países vecinos. En consecuencia, Líbano vio aumentar su población en un 10% a causa de la llegada de refugiados desde el inicio del conflicto armado en 2011 y Jordania ya contaba con un campo de refugiados que, en términos demográficos, ha llegado a ser equivalente a la quinta ciudad del país. La guerra también ha obligado a muchas personas que en el pasado se habían refugiado en Siria a volver a sus países, entre ellos Iraq. A finales de 2013 este país se convirtió en un nuevo foco de desplazamiento forzado a causa de los violentos enfrentamientos en la

1. UNHCR, *Displacement, The New 21st Century Challenge: UNHCR Global Trends 2012*, junio de 2013, http://unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf.
2. UNHCR, *A Year in Review: 2013,* UNHCR Syria, 31 de enero de 2014, http://www.unhcr.org/52eb7a7a9.html.

provincia de Anbar. Según balances dados a conocer a principios de 2014, el conflicto en esta zona, fronteriza con Siria, había motivado la huída de casi 300.000 personas en menos de un mes, la cifra de desplazamiento más elevada desde la peor etapa de la guerra en Iraq (2006-08). Estos datos apuntaban a que, previsiblemente, Oriente Medio continuará estando en el foco de atención en 2014 por las crisis humanitarias derivadas de conflictos violentos. En su informe sobre la situación global de desplazamiento interno en 2012, la organización Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) ya alertaba que la crisis en Siria había multiplicado por cinco los desplazamientos forzados internos en la región, aunque el África subsahariana continuaba siendo la que concentraba los mayores niveles de desplazamiento interno a nivel global.[3]

Detrás de estas cifras se encuentran historias personales desgarradoras, trayectorias individuales que reflejan un sufrimiento a gran escala ante la incapacidad de sus respectivos países y de la comunidad internacional para poner freno a las dinámicas de violencia. Las personas obligadas a huir de los conflictos, la persecución y los abusos se ven expuestas a múltiples situaciones violentas. En ocasiones se convierten en víctimas de redes de tráfico de personas, sufren agresiones o padecen accidentes graves, incluso mortales, durante su tránsito por rutas de salida, como ha quedado en evidencia en el naufragio de embarcaciones atestadas de personas en el Mediterráneo y otras rutas marítimas de inmigrantes y refugiados en Asia.[4] La población desplazada interna y refugiada también enfrenta riesgos asociados a la violencia sexual, al reclutamiento forzado –incluyendo menores de edad–, a los ataques deliberados vinculados a las dinámicas del conflicto o a actitudes racistas contra este colectivo, así como al deterioro de las condiciones de vida debido al hacinamiento, la carencia de albergues en condiciones adecuadas, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a la salud y la educación, o la falta de oportunidades laborales en las zonas o países de acogida. Ante contextos de esta naturaleza, diversas organizaciones internacionales no han dejado de alertar sobre la situación especialmente vulnerable de las mujeres y también de los menores edad, que constituyen casi la mitad de la población refugiada (46% en 2012).

El deterioro de algunos conflictos armados y la emergencia de nuevas crisis en 2013 permiten augurar que se seguirá reforzando la tendencia negativa en la evolución global del desplazamiento forzado

Previsiblemente, estos niveles globales de desplazamiento forzado de población, así como la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de este colectivo, continuarán suponiendo un enorme desafío para las organizaciones internacionales y locales de asistencia humanitaria, para las autoridades de las regiones y países receptores, y también para la población civil, que en muchos casos se convierte en el primer y principal apoyo para las personas necesitadas de acogida y refugio –en el caso del este de RD Congo, por ejemplo, más de dos tercios de los desplazados están siendo albergados por familiares. En este sentido, también cabe destacar que los países en desarrollo son los que están asumiendo principalmente la carga de este fenómeno. En la última década, los países en desarrollo han albergado entre el 70% y 80% de las personas refugiadas a nivel mundial. Estos datos dejan aún más en evidencia la responsabilidad de los países más ricos y poderosos y la necesidad de que se involucren de manera más efectiva en la respuesta a la crisis de desplazamiento global, incluyendo la implementación de políticas de asilo y acogida menos restrictivas. Ante la crisis de desplazamiento provocada por un conflicto tan próximo y mediático como el de Siria, por ejemplo, la respuesta de la UE ha sido marginal: sólo 10 de los 27 países de la Unión se ofrecieron para acoger personas refugiadas y, en total, a tan solo 12.000 personas, lo que representa un 0,5% de las personas que han abandonado el país, según denunció un informe de Amnistía Internacional a finales de 2013.[5] Un hecho que ilustra la magnitud de los retos pendientes y la necesidad de recordar la relevancia de un fenómeno a menudo invisibilizado.

3. IDMC, *2013. Global Overview 2012. People Internally Displaced by Conflict and Violence*, abril de 2013, http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/C57425138CEAE4D0C1257B9B002DC64F/$file/activity-report-2012.pdf.
4. UNHCR, *UNHCR Report to the UN General Assembly, Period 1 January 2012 – 30 June 2013*, 14 de agosto de 2013, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&comid=3b4f07fd4&cid=49aea93a20&scid=49aea93a16&keywords=UNHCR%20Annual%20Reports%20General%20Assembly.
5. Amnistía Internacional, *An International Failure: The Syrian Refugee Crisis*, AI Briefing, 13 de diciembre de 2013, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT34/001/2013/en/8a376b76-d031-48a6-9588-ed9aee651d52/act340012013en.pdf.

6.2. Iraq: Devastador balance de una década de guerra en un contexto de creciente convulsión

El 20 de marzo de 2003 una coalición internacional liderada por EEUU y Reino Unido inició la invasión de Iraq bajo el argumento –que se demostró falso– de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Aunque un mes y medio después el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, se apresuró a declarar la intervención como una "misión cumplida", la violencia ha continuado desgarrando el país con consecuencias catastróficas y acontecimientos recientes indican que la situación en el país podría empeorar de cara a 2014. Los balances dados a conocer con motivo del décimo aniversario del inicio de la guerra dejan poco margen de dudas sobre el impacto del conflicto: entre marzo de 2003 y marzo de 2013 más de 174.000 personas habían muerto, de las cuales una abrumadora mayoría –entre 112.017 y 122.438– eran civiles.[6] Además de decenas de miles de heridos, la guerra ha provocado el desplazamiento forzado de millones de personas dentro y fuera del país. En 2013 esta cifra ascendía a 2,7 millones, aunque en 2007 –uno de los peores años del conflicto– llegó a casi cinco millones de personas (la mitad desplazadas internas y la otra mitad refugiadas, mayoritariamente en países vecinos). La intervención militar ha sido considerada como uno de los peores desastres de la política exterior de EEUU desde la guerra de Vietnam, con efectos desestabilizadores en la región y negativas consecuencias en el orden mundial y el derecho internacional, teniendo en cuenta que la coalición recurrió a la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.[7] La intervención internacional no ha convertido a Iraq en la democracia modélica que, según vaticinaba la administración Bush, proyectaría su ejemplo en Oriente Medio, y para EEUU tampoco ha supuesto garantías de un aliado incontestable en la defensa de sus intereses en la región, ya que el Gobierno de Bagdad –liderado por el shií Nouri al-Maliki desde 2006–, ha entrado dentro de la órbita de influencia de Irán.

Desde marzo de 2003 a marzo de 2013, más de 174.000 personas habían perdido la vida por el conflicto en Iraq, en su mayoría civiles

Una década después el balance también es complejo desde el punto de vista de la población iraquí. Si bien es posible identificar algunos avances, como la reducción de las tasas de pobreza –tras el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas durante el régimen de Saddam Hussein el país ha registrado un crecimiento económico– o un mejor acceso al agua –aunque todavía una cuarta parte de los iraquíes sólo cuenta con dos horas de agua potable al día–, el país también ofrece otros indicadores preocupantes.[8] Entre ellos, problemas para recuperar los sistemas de salud y educación, altos niveles de corrupción –similares a los de la época de Saddam Hussein–, continuos abusos y violaciones a los derechos humanos –incluyendo torturas y una extendida aplicación de la pena de muerte–, junto a un contexto institucional frágil afectado en parte por una estrategia de "divide y vencerás" impulsada por el Gobierno de al-Maliki, que ha favorecido la atomización y fragmentación de las fuerzas políticas. La tendencia más alarmante, sin embargo, es la persistente violencia que afecta al país y que se agravó significativamente en 2013,

La dramática periodicidad de los hechos de violencia se intensificó en el último año hasta unos niveles no observados desde 2008. Los balances de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) y de la organización Iraq Body Count (IBC) indicaban que entre 8.000 y 10.000 civiles habían perdido la vida a lo largo de 2013, confirmando un patrón de incremento de la violencia desde 2011 (año de la retirada de las tropas estadounidenses del país). Si en 2011 se contabilizaban 300 incidentes de seguridad graves por mes, la prevalencia de este tipo de hechos ascendió a 1.200 en 2013.[9] Esta tendencia ha hecho temer que Iraq se vea abocado a un empeoramiento del conflicto a niveles tan graves como los registrados entre 2006 y 2007, período en el que llegaron a registrarse 6.000 incidentes de seguridad graves por mes y en el que las cifras de víctimas mortales a causa de la violencia oscilaron entre las 20.000 y 30.000 personas cada año. La preocupación por una eventual reedición de las dinámicas de guerra civil con un marcado componente sectario como la que se vivió entre 2006-08 ha cobrado fuerzas de cara a 2014, en parte por la creciente sensación de marginación de la comunidad árabe sunní en el país y por un contexto regional caracterizado por el incremento de las tensiones intercomunitarias como consecuencia de la guerra en Siria.

La sensación de exclusión e injusticia entre la población sunní se ha ido acentuando desde el derrocamiento de Saddam Hussein, tras la instauración de un sistema político promovido por la coalición internacional que se construyó bajo una lógica sectaria: dado que la comunidad sunní –tratada como un grupo homogéneo pese a su diversidad y complejidades– había dominado durante el antiguo régimen, se asumió que la transición requería una transferencia de poder a favor de shiíes y kurdos.[10] Aunque el panorama político interno es

6. Iraq Body Count, "The War in Iraq: 10 years and counting: analisys of deaths in a decade of violence", Press Release, 19 de marzo de 2013, https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/ten-years/.
7. Richard Falk, "Lessons to be learnt from the Iraq War", *al-Jazeera*, 14 de marzo de 2013, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/03/2013361029140182.html.
8. IRIN, "Iraq 10 Years On: The Humanitarian Legacy", marzo de 2013, http://www.irinnews.org/report/97897/iraq-ten-years-on-the-humanitarian-impact.
9. Michael Knights, "Iraq's never.ending security crisis", *BBC*, 3 de octubre de 2013, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24370037.
10. International Crisis Group, *Make or Break: Iraq's Sunnis and the State*, Middle East Report no. 144, 14 de agosto de 2013, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2013/mena/make-or-break-iraq-s-sunnis-and-the-state.aspx.

complejo y no responde necesariamente a dinámicas sectarias –importantes grupos shiíes se oponen a al-Maliki y sectores sunníes colaboran con el Gobierno–, existe la extendida percepción de que la represión contra la mayoría shií de la era Hussein ha sido reemplazada por una represión shií contra la minoría sunní del país.[11] En los últimos años, las políticas de al-Maliki en materia de asignación de recursos económicos, puestos de poder, representación en los cuerpos de seguridad, aplicación de leyes antiterroristas, así como la marginación de destacados políticos sunníes –incluyendo el ex vicepresidente Tareq el-Hashemi y el ex ministro de Finanzas Rafi al-Issawi– no han hecho más que exacerbar las divisiones.

2014 aparece como un año complicado en Iraq, teniendo en cuenta la escalada de violencia en 2013, la polarización política asociada a las elecciones parlamentarias y la creciente interconexión con el conflicto en Siria

En este contexto, a lo largo de 2013 las provincias iraquíes donde se concentra la población sunní exhibieron una actitud más contestataria y se movilizaron masivamente para denunciar políticas que consideran discriminatorias y persecutorias por parte del Gobierno de Bagdad. La respuesta represiva del Ejecutivo a las movilizaciones pacíficas y la falta de un liderazgo coherente y unificado en los sectores de oposición sunní favorecieron las posturas más radicales de los partidarios de la vía violenta y empoderaron a sectores armados, entre ellos grupos vinculados a al-Qaeda que intentaron presentarse como defensores de la causa sunní y que acusaron a al-Maliki de connivencia con el eje Damasco-Teherán. Así, tras años de declive, y favorecido por la inestabilidad en Siria, al-Qaeda cobraba nuevo brío en Iraq. Paralelamente, durante 2013 se observó la reactivación de algunas milicias shiíes que, además de involucrarse en enfrentamientos con grupos armados rivales, perpetraron ataques contra población civil y sitios de culto sunní en represalia por los continuos ataques contra shiíes.[12]

La grave situación en Iraq empeoró aún más a finales de 2013. La decisión del Gobierno de desmantelar un campamento de protesta sunní en la provincia de Anbar –la más extensa de Iraq y fronteriza con Siria–, motivó una significativa escalada de violencia que evidenció, además, la creciente interconexión con el conflicto armado en el vecino país. La confrontación involucró principalmente a las fuerzas de seguridad con al-Qaeda en Iraq y Levante (ISIS, por sus siglas en inglés) –que en abril cambió su nombre para explicitar la expansión de sus ambiciones en territorio sirio y su propósito de crear un emirato islámico transfronterizo. ISIS avanzó posiciones y tomó el control de ciudades como Ramadi y Fallujah. A principios de 2014 el Gobierno de al-Maliki intentaba hacer frente a la crisis en Anbar con una ofensiva militar con la ayuda de EEUU, que se comprometió a acelerar la entrega de arsenales –incluyendo misiles Hellfire y aviones no tripulados– para confrontar a al-Qaeda. El conflicto obligaba a decenas de miles personas a abandonar sus hogares en la mayor oleada de desplazamiento forzado en el país en los últimos seis años.[13] Paralelamente, al-Maliki intentaba reeditar la cooperación con milicias tribales sunníes para combatir a al-Qaeda (una estrategia empleada por EEUU en 2008), aunque topándose con desconfianzas y/o con alianzas instrumentales. Algunas milicias aceptaron colaborar con Bagdad, pero por su interés de expulsar a al-Qaeda de su territorio –debido a la negativa experiencia durante el período en que la red extremista controló el territorio– y sin que ello supusiera tomar partido por el Gobierno, del que continúan recelando.

Así, el nuevo año se presentaba pleno de desafíos para Iraq, con retos que trascienden con creces el ámbito de seguridad. Si bien Bagdad ha optado por una respuesta militar a esta última crisis, por sí sola una aproximación de esta naturaleza no resolverá un conflicto enraizado en la sensación de alienación de la comunidad sunní y su percepción de marginación política. Una solución a largo plazo requiere dar una respuesta a las legítimas demandas y agravios de la comunidad sunní e integrarla en un proceso político inclusivo, así como avanzar en un proceso de reconciliación nacional. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que este no es el único foco de conflictos y tensiones en el país y que las disputas internas trascienden la cuestión sectaria. Como han subrayado algunos analistas, el conflicto en Anbar también evidencia una disputa entre las políticas centralizadoras del Gobierno de Bagdad y algunas provincias –incluidas algunas de mayoría shií– que pretenden un mayor acceso a competencias e incluso una fórmula de autonomía similar a la que detenta la región kurda en el norte de Iraq (que, a su vez, mantiene un pulso con el Gobierno central).[14] Las perspectivas de salida a las múltiples dinámicas de conflicto que afectan a Iraq no son alentadoras si se considera que 2014 será un año marcado por las elecciones parlamentarias en abril, en las que al-Maliki ambiciona un tercer mandato –lo que podría exacerbar la violencia, favorecer la polarización política y derivar en una parálisis institucional, como en el pasado–, y por una mayor interconexión entre los conflictos en Siria e Iraq, en un contexto volátil de fronteras crecientemente porosas e inestables[15].

11. John Burns, "A Decade Later, Stability Eludes Iraq", *The New York Times*, 19 de marzo de 2013, http://atwar.blogs.nytimes.com/2013/03/19/a-decade-later-stability-eludes-iraq/?_php=true&_type=blogs&_r=0.
12. International Crisis Group, op.cit.
13. UNHCR, "Continuing fighting in central Iraq leaves 140,000 forcibly displaced", UNHCR, 24 de enero de 2014, http://www.unhcr.org/52e274d19.html.
14. Marina Ottaway, "Anbar violence goes beyond sectarian conflict", *BBC*, 4 de enero de 2014, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25598698.
15. Louise Harbour, "Next Year's Wars", *Foreign Policy*, 30 de diciembre de 2014, http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/12/30/next_year_s_wars.

6.3. Internacionalización y radicalización del conflicto en Siria y su impacto desestabilizador a nivel regional

Hacia finales de 2011 se hizo evidente que la situación en Siria cambiaba de cariz. La contestación popular masiva y pacífica contra el régimen se vio eclipsada por los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y sectores de la oposición que decidieron responder a la represión por la vía armada. Desde entonces, el conflicto no solo ha registrado una significativa escalada de violencia, sino que también ha evolucionado hacia una enorme complejidad que hace cada vez más difícil encontrar una vía de salida. Entre los múltiples factores que explican esta creciente complejidad de la disputa están el incremento de las tensiones sectarias entre sunníes y shiíes; la transformación de Siria en un escenario de guerra de proximidad ("proxy war") entre potencias regionales –una disputa que se ha convertido en una cuestión "existencial" para liderazgos antagónicos como Arabia Saudita e Irán, pero que también ha enfrentado a Riad con Qatar, aliados pero también competidores en el apoyo a distintos grupos rebeldes sirios–; así como los profundos efectos desestabilizadores de la guerra a nivel regional, que se han hecho especialmente evidentes en un incremento de la conflictividad en Líbano e Iraq. A estos elementos hay que sumar la proliferación y fragmentación de los actores armados, y un creciente protagonismo de grupos radicales, extremistas o yihadistas a lo largo de 2013. Todo ello ha dificultado aún más la aproximación de la comunidad internacional a la crisis, caracterizada desde un principio por el bloqueo diplomático pese a las dramáticas consecuencias de la guerra en Siria.

Según algunas estimaciones, más de 11.000 extranjeros se han sumado a la lucha contra el régimen de al-Assad desde el inicio del conflicto, lo que representaría un 10% de las fuerzas armadas rebeldes

Desde el inicio del conflicto, el régimen de Bashar al-Assad intentó atribuir las acciones de la oposición a la intervención de fuerzas foráneas y de grupos terroristas. Este falso argumento pretendía entonces desacreditar las reivindicaciones de la disidencia, pero muchos lo consideran ahora como una profecía auto-cumplida al menos en lo referido al apoyo exterior a los grupos armados rebeldes y a la creciente presencia de combatientes extranjeros en el país. Según algunos análisis, el conflicto armado en Siria ha motivado la mayor movilización de combatientes foráneos desde la guerra de Afganistán en los años ochenta del siglo pasado.[16] Aunque las estimaciones sobre este fenómeno son parciales y difíciles de contrastar, estudios indican que desde 2011 y hasta finales de 2013 unos 11.000 extranjeros se habían sumado al bando opositor al régimen de al-Assad. El contingente foráneo incluiría a nacionales de unos 74 países, en su mayoría árabes –Jordania, Arabia Saudita, Túnez, Líbano, Libia– y de Europa Occidental –Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Holanda–; aunque también se habría identificado a milicianos procedentes de los Balcanes, de países de la antigua órbita soviética, de Somalia, Afganistán o Pakistán.

La presencia de combatientes extranjeros se habría intensificado en el último año, entre otras razones, a causa de la creciente percepción en sectores sunníes de que el conflicto se enmarca en una pugna sectaria que trasciende los límites de Siria y ante la cual urge combatir cualquier avance shií. En esta línea, la mayor presencia foránea también responde a una mayor participación en el conflicto de actores armados regionales en apoyo al régimen de al-Assad, entre ellos milicias shiíes procedentes de Iraq, fuerzas iraníes, y miembros de la milicia shií libanesa Hezbollah, que en 2013 se involucraron abiertamente en los combates contra las fuerzas rebeldes. Esta dinámica tuvo otros ecos transfronterizos, como una mayor actividad de grupos radicales sunníes en Líbano –entre ellos las Brigadas Abdullah al-Azzam, vinculadas a al-Qaeda, que perpetraron atentados contra intereses iraníes y contra bastiones de Hezbollah.

Cabe destacar, sin embargo, que los combatientes extranjeros sólo representarían una décima parte de las fuerzas anti-Assad. Según diversas estimaciones, a finales de 2013 las fuerzas de la oposición contaban con unos 100.000 milicianos que formarían parte de más de un millar de grupos armados, muchos de ellos pequeños, de alcance local y con diversas agendas y apoyos. Si bien en un primer momento el principal referente de la oposición armada en Siria fue el Ejército Sirio Libre (ESL), esta plataforma –que no ha demostrado grandes niveles de coordinación en terreno ni ha contado con un mando unificado efectivo, pese a la creación del Consejo Supremo Militar (CSM) a fines de 2012– se ha visto progresivamente desplazada por otros actores armados, en especial de corte islamista, entre ellos salafistas con diversos niveles de radicalización. Según la consultora internacional en asuntos de defensa IHS Jane, casi la mitad de los rebeldes son islamistas de línea dura –30.000 a 35.000– o yihadistas combatiendo en facciones próximas a al-Qaeda –cerca de 10.000–; mientras que otros 30.000 serían islamistas moderados, por lo que los milicianos seculares serían la minoría.[17]

16. Aaron Zeilin, "Up to 11,000 Foreign Fighters in Syria; Steep Rise Among Western Europeans", *ICSR Insight*, The International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), 17 de diciembre de 2013, http://icsr.info/2013/12/icsr-insight-11000-foreign-fighters-syria-steep-rise-among-western-europeans/.
17. Ben Farmer y Ruth Sherlock, "Syria: nearly half rebel fighters are jihadists or hardline Islamists, says IHS Jane's report", *The Telepraph*, 15 de septiembre 2013, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10311007/Syria-nearly-half-rebel-fighters-are-jihadists-or-hardline-Islamists-says-IHS-Janes-report.html.

En noviembre de 2013, siete de los principales grupos islamistas que operan en el país se unieron para crear el Frente Islámico, considerado como la mayor alianza de fuerzas armadas opositoras en Siria desde el inicio del conflicto. Según algunas estimaciones estaría integrado por unos 45.000 efectivos con el objetivo declarado de derrocar a al-Assad y constituir un Estado islámico. Analistas han advertido que no está del todo claro el nexo de unión entre estos siete grupos sunníes –Harakat al-Sham al-Islamiyya (Movimiento Islámico de los Hombres Libres del Levante), Jaysh al-Islam (Ejército del Islam), Suqour al-Sham (Halcones de Siria), Liwa al-Tawhid (Batallón del Monoteísmo), Liwa al-Haqq (Batallón de la Verdad), Kataib Ansar al-Sham (Brigadas de Apoyo del Levante) y Frente Islámico Kurdo–, ya que algunos de ellos son salafistas (de distintas corrientes), y otros no. El Frente Islámico no sólo opera al margen del ESL, sino que en términos generales recela del apoyo de Occidente y no desea ser percibido como alineado con sus intereses. Aunque muchas informaciones apuntan a que Riad sería su principal valedor, otros datos indican que a nivel individual algunas de estas organizaciones recibirían apoyos de Qatar, Kuwait o de actores privados del Golfo.[18]

En un escenario de elevada fragmentación de los grupos armados en Siria, sectores islamistas, salafistas y yihadistas han adquirido un creciente protagonismo en el bando opositor

La posición del ESL también se ha visto eclipsada por el creciente protagonismo de otro actor armado, el Frente al-Nusra. Compuesto por entre 5.000 y 7.000 combatientes según diversas estimaciones, este grupo armado es considerado como la filial de al-Qaeda en el país desde que su líder, Abu Mohamed al-Julani, declaró su lealtad al líder de la red internacional, Ayman al-Zawahiri. Incluido en las listas de organizaciones terroristas de EEUU, el Frente al-Nusra se ha presentado como una organización que pretende defender la causa sunní y establecer un Estado islámico. Cuando inició sus acciones a principios de 2012 llamó la atención por perpetrar diversos ataques suicidas contra objetivos gubernamentales, pero con el tiempo se ha involucrando de manera más sistemática en combates y ha ganado control de territorios, en especial en el norte del país. En estas áreas, el Frente al-Nusra se ha enfrentando con el ESL y con otros actores armados como las milicias kurdas YPG, vinculadas al PKK, que a lo largo de 2013 asentaron su dominio en las zonas de mayoría kurda en el área septentrional de Siria. Este conflicto interno entre actores armados del bando rebelde no se ha limitado a una disputa entre grupos seculares o moderados, por un lado, e islamistas o radicales, por otro. Algunas pugnas de poder han estado protagonizadas incluso por organizaciones presuntamente vinculadas a al-Qaeda en el país.

En abril de 2013, Abu Bakr al-Baghdadi, líder de al-Qaeda en Iraq, anunció la ampliación de sus objetivos y operaciones en Siria a través de una fusión con el Frente al-Nusra y de la creación de al-Qaeda en Iraq y "al-Sham" (Gran Siria o Levante), más conocido como ISIS por sus siglas en inglés. El liderazgo del Frente al-Nusra, sin embargo, rechazó este anuncio y reivindicó su filiación directa con al-Qaeda. Desde entonces ambos grupos han continuado operando en Siria de manera paralela, aunque con el Frente al-Nusra como organización más "local", ya que la mayoría de los combatientes extranjeros que se habían incorporado a sus filas optaron por sumarse a las fuerzas de ISIS.[19] Esta organización estaría compuesta por unos 12.000 combatientes, la mitad de los cuales estarían luchando en territorio sirio. ISIS ha penetrado con fuerza, en especial a partir del segundo semestre de 2013, en zonas del norte y el este del país, tomando el control de localidades en las provincias de Alepo, Idlib y Raqqa.

En las áreas bajo su control, ISIS ha desplegado estrategias de adoctrinamiento y cooptación a la población en paralelo a la imposición de una interpretación religiosa severa y radical, con múltiples prohibiciones, reclusión de las mujeres en espacios privados, y castigos brutales, incluyendo decapitaciones. ISIS avanzó posiciones en áreas que estaban mayoritariamente bajo control de fuerzas rebeldes y ha puesto en marcha una campaña de persecución frente a cualquier signo de resistencia u oposición a sus designios. Así, ha protagonizado asesinatos y ataques contra población civil shií y alauí, contra dirigentes y grupos vinculados al ESL y a milicias kurdas, pero también contra grupos islamistas árabes sunníes. El asesinato por parte de ISIS de un destacado dirigente de un grupo armado islamista habría sido uno de los factores que avivó los enfrentamientos entre esta organización y varios grupos rebeldes a finales de 2013. El Frente al-Nusra intentó posicionarse como mediador ante los combates entre ISIS y grupos armados de la oposición en algunas localidades, pero en otros lugares se enfrentó al grupo de origen iraquí, que a finales de 2013 y al otro lado de la frontera también intensificó su ofensiva contra las fuerzas armadas de Bagdad. En este contexto, ISIS era percibido por otros grupos rebeldes de Siria como una amenaza, al estar más interesado en consolidar su control sobre territorios y de imponer su versión de la sharia que de luchar contra el régimen de Bashar al-Assad. La organización ha sido acusada de distorsionar los objetivos de la rebelión y favorecer el debilitamiento del bando opositor en una etapa crucial del conflicto armado, lo que incluso ha motivado rumores respecto a que ISIS estaría sirviendo a los intereses de al-Assad. Un presunto comunicado de al-Qaeda,

18. Rania Abouzeid, *Syria's uprising within an uprising*, European Council on Foreign Relations (ECFR), 16 de enero de 2014, http://ecfr.eu/content/entry/commentary_syrias_uprising_within_an_uprising238.
19. Christoph Reuter, "Jihadist Group Expands Rapidly in Siria", *Spiegel Online*, 18 de diciembre 2013, http://www.spiegel.de/international/world/isis-shadowy-jihadist-group-expands-rapidly-in-syria-a-939561.html.

en tanto, se desvinculó de ISIS a principios de 2014, dificultando aún más la tarea de situar en el mapa a los diferentes actores en conflicto. Según algunos análisis, incluso el liderazgo central de al-Qaeda consideraría que la brutalidad de ISIS es contraproducente.[20]

En medio de este intrincado panorama, lo que sí parece claro es que para los grupos armados en terreno es cada vez más difícil identificar quién es aliado y quién es adversario, en medio de un clima de violencia y radicalización que, previsiblemente, seguirá afectando a la población civil en 2014. Este fenómeno no sólo ha hecho que grupos cada vez más radicales hagan parecer "moderados" a otros con posiciones también extremas –como ha ocurrido con ISIS y el Frente al-Nusra–, sino que también estaría provocando que en algunas zonas sectores de la población hayan comenzado a lamentar la pérdida de Bashar al-Assad. Ante la amenaza yihadista, el presidente y su régimen también han empezado a ser reconsiderados como un mal menor en ciertos círculos políticos occidentales, e incluso ex diplomáticos estadounidenses han planteado que será inevitable contar con el dirigente como parte de la solución, como pieza clave en el combate frente a los grupos extremistas.[21] Otros observadores, sin embargo, creen que la posibilidad de alcanzar cualquier solución que implique contar con al-Assad ya no es viable, dados los numerosos crímenes perpetrados por las fuerzas gubernamentales durante el conflicto y la previsible oposición de actores como Arabia Saudita a una salida de compromiso con el régimen sirio.[22] En un escenario en que cualquier predicción de futuro parece arriesgada, quizá una constatación posible es que la preocupación por la amenaza yihadista –un factor común para países como EEUU, Rusia y China, que se han posicionado de manera dispar frente al conflicto– puede favorecer una aproximación de posturas entre actores internacionales con capacidad para incidir en la evolución del conflicto. Más que las terribles consecuencias de la guerra sobre la población civil, esta convergencia de intereses de las potencias respecto a la necesidad de frenar un ascenso yihadista con consecuencias desestabilizadoras a nivel regional e internacional puede convertirse en un aliciente en la búsqueda de una salida política a la crisis.

20. The Economist, "Syria's civil war: Will the jihadists overreach?", *The Economist*, 12 de octubre 2013, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21587845-extremist-group-ruffling-feathers-including-those-its-islamist.
21. Robert Worth y Eric Schmitt, "Jihadist Groups Gain in Turmoil Accross Middle East", *The New York Times*, 3 de diciembre 2013, http://www.nytimes.com/2013/12/04/world/middleeast/jihadist-groups-gain-in-turmoil-across-middle-east.html.
22. Paul Adams, "Syria crisis: time to rethink a future with Assad?", *BBC*, 13 diciembre 2013, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25362244.

6.4. Eritrea ante una posible implosión del Estado de imprevisibles consecuencias

El régimen autoritario de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, al frente del cual se encuentra el presidente Isaias Afwerki, ha dado muestras de debilidad y de un creciente descontento a nivel interno en los últimos años y en especial desde 2012. Diferentes cuestiones hacen temer un estallido violento que podría tener graves consecuencias no solo a escala local de cara a una próxima transición a nivel político, sino también en el contexto regional del Cuerno de África. La creciente división en el seno de la cúpula en el poder, los rumores del deterioro de la salud del presidente durante 2013 –que pusieron en evidencia la ausencia de un plan de sucesión de Afwerki–, la nula respuesta del Ejército eritreo ante la incursión militar del Ejército etíope en persecución de un grupo armado –que evidenció la debilidad del otrora poderoso Ejército del país–, el intento de golpe de Estado en enero de 2013 y las deserciones de importantes figuras y cargos políticos del entorno y núcleo de poder del presidente Afwerki son algunas de las cuestiones que revelan la gravedad de la situación.

En los últimos años ha trascendido una creciente división en el entorno del presidente. El papel central que jugó Afwerki desde el liderazgo en la lucha por la independencia de Etiopía 30 años atrás y, posteriormente, como nuevo presidente de la Eritrea independiente en 1993 derivó en una progresiva centralización del poder a partir de mediados de los años noventa. El presidente mantuvo al país en permanente estado de guerra, lo que convirtió al Ejército en la institución central del país. Tal y como ha señalado la organización International Crisis Group, el presidente Afwerki ha anulado las diferentes instituciones y contrapoderes en el seno del Estado, ha fomentado la rivalidad entre ellas y ha construido un sistema clientelar de patronazgo que converge en su persona. Las promesas democráticas realizadas tras la independencia de Etiopía consistentes en elaborar una Constitución, introducir un sistema político multipartidista y convocar elecciones en el país quedaron permanentemente congeladas. Aunque se elaboró un borrador de Constitución en 1997, nunca se implementó. La guerra contra Etiopía (1998-2000) contribuyó a aparcar las reformas, justificar la concentración de poder y la permanencia del estado de guerra. La irresuelta demarcación fronteriza con Etiopía tras los acuerdos de Argel del año 2000 sirvió como acicate para mantener esta situación y el tendencioso papel jugado por la comunidad internacional favoreciendo los intereses etíopes contribuyó a fortalecer la postura gubernamental. Las demandas de reformas democráticas (recogidas en documentos como el Manifiesto de Berlín del año 2000 y la carta del Grupo de los 15) fueron silenciadas y reprimidas.

En paralelo, el país se ha convertido en una de las sociedades más militarizadas del mundo, donde la ciudadanía realiza un servicio militar obligatorio e indefinido, considerado como una prolongación de su contribución a la lucha por la liberación nacional. Para garantizarse lealtades y protegerse de las críticas, el presidente y su cúpula política han creado una red clientelar "comprando" a los altos cargos militares, que se han convertido en los árbitros del poder en el país y que a su vez han construido redes de lealtad que les han conferido independencia respecto al poder central. Este grupo de generales se encuentra dividido en la actualidad en dos grupos, los leales al presidente y los escépticos, que han perdido la confianza en Afwerki. Estos últimos son conscientes del declive del Ejército y de que una agresión por parte de Etiopía sería imposible de defender, como ya sucedió en marzo y mayo de 2012, ante la impotencia de determinados sectores castrenses. Ante los rumores de que este último sector ha promovido consultas con Afwerki con la intención de conducir al país a una transición pactada del poder y evitar la fallida del Estado, Afwerki ha respondido con destituciones para acallar las críticas en las altas esferas y con la creación de nuevas milicias armadas con el objetivo de protegerse de determinados sectores del Ejército.

Existe un clima de preocupación ante un posible estallido violento en Eritrea de graves consecuencias no solo a escala local sino también en el contexto regional del Cuerno de África

Periódicamente han surgido rumores sobre el pésimo estado de salud de Afwerki. Entre el 28 de marzo y el 27 de abril de 2012 no fue visto en público, lo que desencadenó nuevamente estos rumores, dada su asidua presencia en el canal oficial de comunicación, Eri-TV. El 27 de abril Afwerki compareció ante Eri-TV, para conceder una entrevista e intentar disipar dichos rumores. La novedad de una ausencia tan prolongada de Afwerki, las especulaciones previas sobre su estado de salud y los desmentidos del Ministerio de Información respecto a un deterioro de su estado (e incluso su posible muerte, según algunas fuentes) dieron más veracidad al rumor. Según estas informaciones, Afwerki habría sido trasladado a Qatar para ser tratado de urgencia de una enfermedad hepática. El Ministerio de Información eritreo acusó a la agencia estadounidense CIA de haber orquestado esta campaña de difamación. La supuesta enfermedad de Afwerki habría desencadenado un clima de inquietud en el seno del Ejército y en el entorno del presidente dada la inexistencia de un plan para gestionar una transición sin Afwerki.

Otro elemento que pone de manifiesto esta creciente tensión fue el motín que se produjo en enero y que fue sofocado por las autoridades. El 21 de enero de 2013 un centenar de militares ocuparon el Ministerio de Información y transmitieron un mensaje por el canal de televisión oficial en el que solicitaron la implementación de la Constitución de 1997 y la liberación de los presos de conciencia existentes en el país. Posteriormente, se entregaron a las autoridades, que iniciaron una

investigación y una oleada de arrestos durante febrero. En un primer momento, se especuló sobre la posibilidad de que se tratara de un intento de golpe de Estado. Las acciones posteriores emprendidas por el Gobierno, según analistas, sí que ponen de manifiesto el alcance de la situación. El 5 de febrero el Ministerio de Información prohibió a la población eritrea informar del motín y de las protestas al canal al-Jazeera, que fue posteriormente cerrado. Días después el presidente Afwerki hizo una alocución afirmando que no existían motivos de preocupación. No obstante, con el objetivo de limitar la posibilidad de que surja una revuelta en el seno de las Fuerzas Armadas, Afwerki activó la militarización de la sociedad civil con la creación de milicias como contrapoderes al Ejército, conocidas como Hzbawi Serawit, o Ejército Popular, lo que implica en la práctica un servicio militar indefinido.

El presidente eritreo y su cúpula política han creado una red clientelar para asegurarse lealtades por todo el país

Por último, el Grupo de Supervisión de la ONU sobre Eritrea y Somalia también reveló en julio de 2013 la emergencia de fisuras en las instituciones de seguridad de Eritrea, como demostraron la sublevación de enero y las deserciones de alto nivel en las ramas civil y militar del Gobierno, como por ejemplo los dos pilotos de las Fuerzas Aéreas que se fugaron con el avión presidencial y que demandaron asilo en Arabia Saudita en octubre, la deserción en noviembre del ministro de Información y próximo de Afwerki, Ali Abdu, en paradero desconocido, y la deserción del equipo nacional de futbol en diciembre mientras se encontraba en Uganda en el marco de una competición internacional. Las fisuras parecen ser particularmente agudas entre una camarilla de altos mandos de las Fuerzas Armadas y quienes gestionan el aparato clandestino paramilitar, financiero y de inteligencia controlado por el presidente. A esto se añade el hecho de que miles de personas hayan abandonado el país en los últimos años, a razón de entre 2.000 y 3.000 personas al mes durante el año 2013. A esto se une el aislamiento al que ha sometido la comunidad internacional al país en los últimos años a raíz de su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab así como a los diferentes movimientos opositores armados que pretenden un cambio político por la fuerza. La relación de Eritrea con el grupo al-Shabaab puede mejorar o empeorar en función de las circunstancias internas en Eritrea, lo que repercute en la evolución de las acciones de al-Shabaab en Somalia. Ante todas estas cuestiones, que se añaden a las numerosas divisiones culturales, lingüísticas, étnicas, económicas, políticas y religiosas que forman parte de la idiosincrasia del país, no es descartable que pueda producirse un colapso del Estado de peligrosas consecuencias.

6.5. Tailandia: una década de protestas y un futuro incierto

Durante el año 2013 se vivieron en Tailandia las movilizaciones más importantes de los últimos años, tanto por su carácter masivo y continuo en el tiempo como por su impacto político (disolución del Parlamento, dimisión del Gobierno, convocatoria de elecciones anticipadas). Si bien hasta finales de 2013 no se han registrado episodios de violencia de gran intensidad –a finales de año habían muerto ocho personas y varios cientos de ellas habían resultado heridas–, existen algunos factores para pensar que la crisis política que ha vivido Tailandia durante el 2013 puede no solamente persistir a corto y medio plazo, sino también provocar mayores niveles de violencia e incluso un golpe de Estado.

Las Fuerzas Armadas en Tailandia han tenido históricamente un papel preponderante, tanto por su influencia como por su injerencia en los asuntos políticos. Desde el año 1932 ha habido 18 golpes de Estado exitosos o fallidos, el último de ellos en el año 2006 contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, la figura política más influyente de la última década y sobre la que pivota en buena medida la actual crisis socio-política. Aunque hasta el momento las máximas autoridades militares han rechazado cualquier presión para llevar a cabo otro golpe, varios analistas consideran que dichas negativas no siempre han sido lo suficientemente tajantes como para pensar que en un futuro próximo no pudiera darse una intervención militar. Estos mismos analistas consideran que una de las principales estrategias de la oposición es mantener niveles altos y sostenidos de movilización –con el riesgo de que se produzcan episodios de violencia y con el perjuicio económico que causan al país– para llevar al país a una situación insostenible y forzar así un nuevo golpe de Estado. Normalmente se ha considerado que la cúpula y la mayor parte de las Fuerzas Armadas son más favorables a la oposición y a los manifestantes que no al actual Gobierno, como así lo demuestra el golpe de Estado contra Thaksin Shinawatra del año 2006 y el consiguiente establecimiento de gobiernos militares. Sin embargo, el hecho de que algunos sectores del Ejército estuvieran más cercanos a las posiciones de los denominados "camisas rojas" –simpatizantes tradicionales de Thaksin Shinawatra–, ha provocado que algunas voces adviertan sobre el riesgo de división en la institución castrense y, por tanto, de violencia generalizada o incluso guerra civil si las Fuerzas Armadas intentan perpetrar un nuevo golpe de Estado.

Un segundo factor que añade incertidumbre a la actual crisis es la enorme polarización social y política que existe en el país. Dicha polarización se ha reforzado y acrecentado a lo largo de casi una década de protestas masivas y sostenidas, en las que ambas partes han recurrido insistentemente a la movilización social, la paralización de las principales ciudades y de la economía, e incluso a la violencia esporádica y de baja intensidad, como estrategia para alcanzar objetivos políticos. Con el paso del tiempo, esta estrategia de movilizaciones sociales –que a menudo se ha concretado en la ocupación de infraestructuras clave o de edificios públicos de gran importancia simbólica, como el Parlamento o la sede del Gobierno–, se ha ido internalizando en la cultura política del país y se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por determinadas élites para conseguir objetivos políticos. Es cierto que las continuas protestas sociales en la última década han comportado la politización de sectores tradicionalmente excluidos o alienados del sistema. Sin embargo, cabe recordar que la inmensa mayoría de las protestas que se han registrado en Tailandia en la última década no han estado motivadas por la reivindicación de demandas sectoriales o derechos de tipo social, económico o laboral, sino a favor o en contra de los Gobiernos de distinto signo que se han sucedido en la última década. Por otra parte, la continua apelación a las protestas a menudo ha comportado la erosión, cuando no la sustitución, de los mecanismos convencionales de participación y representación democrática, ha debilitado las espacios de concertación de intereses entre las partes antagonistas y también ha incrementado el riesgo de enfrentamientos directos entre partidarios y detractores del Gobierno, especialmente cuando protestas simultáneas de signo contrario coincidían físicamente en la capital.

La situación de polarización, alimentada por años de movilizaciones de distinto signo y por la intransigencia de las partes en conflicto, no tiene visos de reducirse por la intervención de una tercera parte

Actualmente, la posibilidad de vislumbrar espacios de encuentro y mecanismos de solución de la crisis o de reducción de la tensión se encuentra claramente hipotecada por la cerrazón de los principales actores en juego y su negativa a ceder mínimamente en sus posturas y demandas. A ello seguramente contribuye el hecho de que los principales líderes de los dos grandes bloques protagonistas de la crisis tengan causas penales abiertas, lo cual disminuye los incentivos para el compromiso y, en cambio, refuerza la estrategia de victoria total y derrota del adversario como única salida al conflicto. En 2008 Thaksin Shinawatra fue condenado *in absentia* a dos años de cárcel por corrupción y abuso de poder, mientras que el actual líder de las movilizaciones, Suthep Thaugsuban, está acusado, entre otros cargos, de sedición, lo cual supondría penas severas. Además, todavía está pendiente de resolución judicial su presunta responsabilidad en tanto que viceprimer ministro de la época (2008-2011) en la muerte de más de 90 personas durante las protestas de abril y mayo de 2010. Tanto Thaksin Shinawatra como Suthep Thaugsuban y Abhisit Vejjajiva (ex primer ministro y líder del principal partido opositor, el Partido

Demócrata) probablemente consideran que ceder en sus posturas o compartir poder con el adversario les comportaría graves costos personales.

La actual situación de polarización, alimentada por tantos años de movilizaciones de distinto signo y por la intransigencia de las partes en conflicto, tampoco tiene visos de reducirse por la intervención de una tercera parte que medie o arbitre entre las posturas de ambos bloques. El rey, la figura que seguramente debería jugar este papel por ser ampliamente respetada por el gran conjunto de la población, se halla en una avanzada edad y un precario estado de salud. Además, su apoyo tácito o explícito al golpe de Estado perpetrado contra Thaksin Shinawatra en 2006 seguramente le convierte en un actor parcial a ojos del actual Gobierno. En cuanto a otras dos instituciones que podrían jugar un papel de intermediación, ASEAN y Naciones Unidas, su margen para facilitar el diálogo se ve reducido por la tradicional reticencia con la que el Estado tailandés ha percibido cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Ambas instituciones han expresado su preocupación por la situación que atraviesa Tailandia, pero hasta el momento no han jugado un papel activo. En el caso de ASEAN, uno de los principios fundacionales de la organización es el respeto escrupuloso a la soberanía nacional y la no interferencia en cuestiones domésticas de sus Estados miembro.

Además de las causas y las dinámicas políticas que están detrás de la actual polarización en la sociedad tailandesa, la salida a la actual crisis tampoco parece ser muy halagüeña desde el punto de vista de las soluciones propuestas por ambas partes. Ante la magnitud y la persistencia de las movilizaciones y la dimisión en bloque de los parlamentarios del principal partido opositor, en diciembre Yingluck Shinawatra disolvió la Cámara y convocó elecciones anticipadas para el 2 de febrero de 2014. Sin embargo, Suthep Thaugsuban y el Partido Demócrata se oponen a dichos comicios y, en cambio, proponen la dimisión de Shinawatra como primera ministra interina y la conformación de un "consejo popular" (de manera no electa) que durante un año o año y medio lleve a cabo las reformas necesarias, también en clave electoral, para poner fin a lo que denominan el "régimen de Thaksin". Públicamente, las razones que se han esgrimido para la negativa a los comicios son las presuntas irregularidades electorales cometidas por el Gobierno, pero la mayor parte de analistas coincide en señalar que en realidad la oposición tiene escaso convencimiento acerca de sus posibilidades de imponerse en unos comicios. De hecho, la última victoria electoral del Partido Demócrata se remonta al año 1992, mientras que las formaciones lideradas formalmente o de facto por Thaksin Shinawatra han obtenido la victoria en todas las elecciones desde el año 2001, incluyendo la abultada victoria que obtuvo en los últimos comicios en 2011. La mayor parte de analistas consideran que cualquier solución a la actual crisis no puede hacerse al margen o en detrimento de los mecanismos convencionales de representación democrática, como la celebración de elecciones y la conformación de mayorías parlamentarias sólidas y estables. Ello menoscaba el plan de la oposición de establecer un consejo representativo (pero no electo) encargado de acometer una serie de reformas estructurales encaminadas a superar o revertir el actual sistema político.

Además de los factores que explican por qué Tailandia puede convertirse en uno de los puntos más volátiles e inestables del Sudeste Asiático, también cabe señalar que la crisis de gobernabilidad que sufre el país puede tener un claro efecto negativo sobre otros dos escenarios que, a su vez, entrañan un enorme potencial de conflicto. El primero de ellos es el contencioso entre Tailandia y Camboya sobre la soberanía de un territorio que rodea a un templo hindú del siglo XII ubicado en una región fronteriza. Aunque dicha disputa parece hallarse en vías de resolución pacífica por la intervención diplomática de ASEAN en los últimos años, por la buena sintonía política entre los actuales Gobiernos tailandés y camboyano y, especialmente, por el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Camboya –que obliga a Tailandia a retirar a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la región en cuestión–, lo cierto es que algunos sectores opositores al Ejecutivo de Yingluck Shinawatra podrían aprovechar esta disputa para tratar de erosionar al Gobierno. De hecho, algunos grupos nacionalistas tailandeses y opositores al Gobierno ya han llevado a cabo algunas movilizaciones para exigir a Bangkok una postura más beligerante al respecto y ya han anunciado que no acatarán el fallo de la CIJ y que llevarán a cabo nuevas protestas. El segundo escenario de conflicto que podría padecer negativamente la crisis política y la parálisis institucional en Tailandia es el proceso de negociación iniciado en 2013 entre el Gobierno y parte de la insurgencia que opera en las provincias meridionales de mayoría musulmana fronterizas con Malasia. A pesar de que en los últimos años el conflicto armado en el sur de Tailandia se ha convertido en unos de los más letales de la región, las constantes movilizaciones sociales y crisis políticas que ha sufrido Tailandia en la última década han hecho que la gestión del conflicto se vea obstaculizada y relegada a un segundo término. Como también habían hecho gobiernos anteriores, el ejecutivo de Yingluck Shinawatra declaró al inicio de su mandato que la resolución del conflicto armado en el sur sería una de sus prioridades, pero tanto la acción de gobierno al respecto como incluso las varias rondas de negociación que ya se han llevado a cabo en cierta medida han quedado a expensas y a remolque de la crisis sociopolítica entre partidarios y detractores del Gobierno.

Por tanto, la actual crisis de gobernabilidad en Tailandia entraña un doble riesgo. Por un lado, el de engendrar mayores niveles de violencia, ya sea por enfrentamientos directos entre partidarios y detractores del Gobierno, por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por el temor de que se perpetre un golpe de Estado o por la posibilidad de algunas de las líneas de

fragmentación en la sociedad tailandesa (ideológicas, de clase, territoriales o del tipo que sean) se trasladen a las Fuerzas Armadas y provoquen fricciones o incluso brotes de violencia en el seno del Ejército. El segundo riesgo que conlleva la crisis tailandesa es el de desestabilización regional. Más allá del valor de Tailandia desde el punto de vista geoestratégico (yacimientos petrolíferos en el Golfo de Tailandia, alianzas militares en una región tan sensible como la del Mar de China Meridional), la actual situación política de Tailandia puede tener efectos en algunos de sus países vecinos, como Camboya o Malasia. La erosión de los mecanismos convencionales de articulación y concertación de intereses (Parlamento, elecciones) a favor de las estrategias de movilización y confrontación ciudadana continuas, el escaso margen que parecen destinadas a jugar algunas instituciones que podrían conciliar posiciones (como el rey, ASEAN o Naciones Unidas), la petrificación de las posturas y la aparente poca predisposición de las partes a plantear demandas aceptables para el adversario hacen de Tailandia un escenario volátil e inestable en que difícilmente se vislumbran salidas políticas consensuadas a corto plazo.

6.6. El incremento de la violencia en la provincia china de Xinjiang

El incremento en la frecuencia, la intensidad y la sofisticación de los ataques armados en Xinjiang (también denominada Turquestán Oriental) durante el año 2013 provocaron, entre otras cuestiones, que Beijing reconozca que la insurgencia uigur es la amenaza a la seguridad nacional más real e inmediata que enfrenta el país y que Beijing haya doblado el presupuesto de lucha contra el terrorismo y haya incrementado su presencia policial y militar en la provincia. Si bien organizaciones uigures en el exilio ya han denunciado un notable incremento en los niveles de represión y de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, de cara al futuro la situación de inestabilidad en la región se puede agudizar por la importancia estratégica que tiene Xinjiang para la seguridad nacional, el abastecimiento energético y el desarrollo económico de China, por la creciente visibilidad mediática internacional que están obteniendo algunos de los reciente episodios de violencia, por la gran complejidad geoestratégica de la fronteriza Asia Central y por las consecuencias que pueda tener para la región en general, y para Xinjiang en particular, la progresiva retirada de tropas estadounidenses de Afganistán.

La retirada de tropas estadounidenses de Afganistán podría provocar un cierto vacío de seguridad en la región que podría ser aprovechado por algunas organizaciones islamistas para extender sus acciones a Xinjiang

La intensificación de la violencia en Xinjiang durante el año 2013 confirma una tendencia al alza en el número de episodios de violencia que se observa desde hace varios años. Más allá del número de incidentes violentos, uno de los aspectos que más preocupa a Beijing es la creciente visibilidad mediática que puedan tener algunos de estos incidentes. En octubre de 2013, por ejemplo, los principales medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre un atentado perpetrado en la plaza de Tianmanmen (el centro político y simbólico de China) por personas de etnia uigur. Por otra parte, fuentes gubernamentales señalaron que las organizaciones armadas uigures cada vez más disponen de la voluntad y la capacidad de llevar ataques en varios puntos del territorio chino más allá de Xinjiang. La mayor visibilidad mediática de los hechos de violencia en Xinjiang puede comportar un mayor interés de la comunidad internacional del conflicto hacia el conflicto e incentivar algunas iniciativas que reviertan en la mejora de la situación de derechos humanos, pero a la vez puede comportar una respuesta más agresiva por parte del Gobierno para evitar o silenciar movilizaciones o actos de protesta. En este sentido, cabe señalar que el Ejecutivo chino hasta el momento ha respondido de manera contundente ante la críticas o denuncias vertidas por algunos Gobiernos (como el de EEUU) u organizaciones de derechos humanos.

La posibilidad de que el Gobierno chino decida militarizar aún más la región y el conflicto seguramente está estrechamente vinculada a la importancia estratégica de Xinjiang para China, tanto en el plano económico como en el plano de la seguridad nacional. Respecto del primer punto, la región de Xinjiang es clave para la suficiencia energética de China y, por tanto, para su desarrollo económico en las siguientes décadas.[23] Actualmente Xinjiang es la tercera provincia productora de petróleo en China, y se estima que solamente se han descubierto una pequeña parte de las reservas que alberga. Xinjiang también es la principal generadora de gas (aproximadamente un tercio de la producción nacional) y una de las principales fuentes de carbón y energía eólica. También en clave de abastecimiento energético, Xinjiang es una región fundamental para China, puesto que por allí pasan los principales oleoductos y gaseoductos que importan hidrocarburos desde Asia Central y Oriente Medio, las dos principales fuentes de energía de China. Cabe señalar que actualmente China es el segundo importador de petróleo a escala mundial y es uno de los países del mundo con mayor dependencia del petróleo. La alternativa a los oleoductos y gaseoductos que atraviesan Xinjiang sería el transporte de energía por mar, lo cual incrementa el tiempo, el coste y el riesgo de incidentes, puesto que deben navegarse regiones geoestratégicamente sensibles como el Océano Índico o el estrecho de Malaca, uno de los principales puntos de la piratería internacional.

En términos de seguridad nacional, el hecho de que Xinjiang tenga frontera con varios países de Asia Central también es geoestratégicamente relevante, tanto por la influencia que China quiera y pueda ejercer en Asia Central en las siguiente décadas como por las influencias y dinámicas que puedan trasladarse a China desde algunos de los países fronterizos que, como Pakistán y Afganistán, en las últimas décadas han padecido conflictos armados con un enorme potencial para desestabilizar la región. Algunos análisis consideran que Xinjiang puede erigirse en un tapón a la entrada en China de organizaciones o ideologías potencialmente desestabilizadoras, pero también en una puerta de entrada a las mismas. El incremento de la violencia en Xinjiang ha alimentado el debate sobre la capacidad bélica de la principal organización armada, el Movimiento Islámico de Turquestán Oriental (ETIM, por sus siglas en inglés), sobre sus vínculos con grupos foráneos o incluso sobre la infiltración de combatientes extranjeros en territorio chino. Durante el año 2013, Beijing denunció la infiltración en Xinjiang de grupos

23. International Crisis Group, *China's Central Asia Problem*, Asia Report no. 244, 27 de febrero de 2013, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/244-chinas-central-asia-problem.aspx

procedentes de Siria y la presencia de combatientes uigures en la guerra de Siria luchando contra el Gobierno de Damasco. Además, en los últimos años ha insistido en varias ocasiones sobre los vínculos de ETIM con el IMU, un movimiento formado a principios de los años noventa que inicialmente operaba en Uzbekistán pero que con el paso del tiempo ha extendido su radio de acción a otras zonas de Asia Central y de Pakistán y Afganistán. Tanto el Gobierno como algunos medios de comunicación dan por supuesta la relación entre ETIM y las milicias talibán y se refieren al grupo como una franquicia local de al-Qaeda, sustentando tales suposiciones en noticias como la prolongada detención de 22 uigures en la prisión de Guantánamo o en informes de inteligencia que señalan que combatientes uigures reciben entrenamiento militar en Afganistán. A pesar de que la cúpula de ETIM ha negado dichos vínculos en alguna ocasión, el Gobierno chino ha insistido en el nexo entre el secesionismo uigur y el extremismo islámico transnacional y ha sido capaz de vincular su lucha contrainsurgente contra organizaciones secesionistas uigures con la llamada guerra global contra el terrorismo, obteniendo así un cierto apoyo internacional.

El incremento de la violencia en Xinjiang ha provocado que Beijing reconozca que la insurgencia uigur es la amenaza a la seguridad nacional más real e inmediata y que haya doblado el presupuesto de lucha contra el terrorismo y haya incrementado su presencia policial y militar en la provincia

En efecto, el apoyo que algunas repúblicas centroasiáticas han prestado a Beijing en su lucha contra el secesionismo uigur, tanto en las relaciones bilaterales como a través de la Organización de Cooperación de Shanghai, es especialmente importante para el Gobierno chino. No solamente porque facilita cuestiones como los tratados de extradición, sino porque Beijing neutraliza de esta manera el eventual apoyo que pudiera tener la causa uigur en determinados países por la afinidad cultural, lingüística e histórica entre varios de los pueblos túrquicos de la región. Cabe recordar que la comunidad uigur históricamente ha tenido vínculos culturales con otros pueblos de habla túrquica y su identidad ha tenido un cierto componente transnacional. Desde la perspectiva de Beijing, este hecho hace a la comunidad uigur especialmente receptiva a un determinado pan-turquismo promovido entre algunas repúblicas centroasiáticas, y especialmente reacia a las políticas asimilacionistas impulsadas desde el Gobierno chino en las últimas décadas. En cualquier caso, a pesar de la dimensión transnacional de la identidad uigur, de los posibles vínculos entre el ETIM y organizaciones foráneas y de su presunta cercanía al islamismo radical, varios analistas han señalado que el Gobierno chino ha tendido a exagerar la amenaza del secesionismo uigur. Como mínimo hasta el momento, el ETIM jamás ha tenido la capacidad de erigirse en una amenaza seria para el Gobierno chino ni de mantener una lucha insurgente de envergadura por su falta de apoyo a escala internacional y por los escasos recursos humanos y materiales a su disposición.

El último factor que podría motivar un incremento de la tensión en Xinjiang es el supuesto vacío de seguridad en la región que podría provocar la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán. Según algunos análisis, algunas organizaciones podrían aprovechar el nuevo escenario que se abre en Afganistán para incrementar su presencia la región, por lo que algunos países de Asia Central ya habrían iniciado aproximaciones a Rusia y China para que de alguna manera sustituyan el rol que hasta el momento jugaba EEUU en la región. Según algunas informaciones, una de las consecuencias de este nuevo escenario sería la aproximación del Gobierno chino al Gobierno afgano (al que habría garantizado el estatus de observador en la Organización de Cooperación de Shanghai), el mantenimiento de buenas relaciones con Pakistán e incluso un acuerdo tácito con algunas de las milicias talibanes según el que Beijing proporcionaría un cierto reconocimiento político a la insurgencia a cambio que ésta no extendiera sus acciones armadas a Xinjiang o incrementara su cooperación con el ETIM u otras organizaciones armadas uigures. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno chino para gestionar el conflicto en Xinjiang tanto en foros multilaterales –como la Organización de Cooperación de Shanghai– como a través de la mejora de las relaciones bilaterales con determinados actores clave, algunos analistas consideran que determinadas organizaciones islamistas podrían aprovechar el nuevo escenario que podría provocar la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán para extender sus acciones a Xinjiang.

A pesar de que el secesionismo uigur ha sido activo en Xinjiang en las últimas décadas, hasta hace relativamente poco no había logrado captar la atención de medios de comunicación ni de la comunidad internacional. Bajo el emparo de la guerra global contra el terrorismo, Beijing había sido capaz de justificar sus políticas contrainsurgentes en Xinjiang, silenciar las violaciones de derechos humanos denunciadas por organizaciones uigures y garantizarse el apoyo de las grandes potencias y de sus países vecinos en su lucha antiterrorista. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente en 2013, tanto el incremento como la mayor visibilidad de las acciones armadas del secesionismo uigur han provocado un incremento de la represión y de la militarización en Xinjiang. La gran importancia estratégica de dicha provincia en términos de abastecimiento energético, desarrollo económico y seguridad nacional permiten augurar que el Gobierno chino pondrá todos los medios a su disposición para evitar cualquier signo de inestabilidad en la región.

6. 7. La disputa entre China y Japón por las islas Senkaku/Diaoyu y el juego de poder en Asia Oriental

La disputa entre China y Japón[24] por la soberanía de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente), así como por la delimitación de sus respectivas zonas económicas exclusivas y de sus zonas de identificación de defensa aérea en el Mar de China Oriental, vivió en 2013 varios episodios de desencuentros y acciones unilaterales.[25] Estos hechos incrementaron significativamente la tensión bilateral y regional en torno a un contencioso histórico que se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta, momento en el que China y Japón reanudaron sus relaciones diplomáticas y en el que EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió la soberanía de éstas a Japón. Según coinciden en señalar numerosos analistas, la mencionada disputa territorial no solamente podría desembocar en algún incidente o conflicto militar entre ambos países, sino que también alberga un enorme potencial de desestabilización de una región altamente sensible desde el punto de vista estratégico y en la que ya existen numerosos contenciosos de soberanía entre distintos Estados. Los principales factores que explican el riesgo de escalada y desestabilización del conflicto son la alta sensibilidad geoestratégica tanto de las islas en disputa como del Mar de China Oriental y los intereses nacionales contrapuestos en la región a corto y medio plazo de China y Japón, dos países con relaciones bilaterales muy difíciles y complejas que dificultan el establecimiento de mecanismos de comunicación y cooperación o la resolución de incidentes.

La disputa territorial entre China y Japón no solamente podría desembocar en algún incidente o conflicto militar entre ambos países, sino que también alberga un enorme potencial de desestabilización de una región altamente sensible desde el punto de vista estratégico

El riesgo más inmediato es que un incidente militar naval o aéreo, involuntario o deliberado, pudiera provocar una escalada de la violencia en la región de consecuencias inciertas.[26] El hecho de que las zonas económicas exclusivas y las zonas de identificación de defensa aérea reivindicadas por ambos países se solapen ha incrementado sustancialmente la presencia de navíos y aviones que patrullan la zona en disputa y, por tanto, el riesgo de incidentes militares. El deterioro que han experimentado las relaciones bilaterales desde una colisión naval en septiembre de 2010 y desde la compra a un particular por parte del Gobierno japonés de tres de las islas en disputa en septiembre de 2012 ha comportado, entre otras cuestiones, la falta de mecanismos de comunicación directa y de protocolos de actuación, lo que sin duda dificulta la capacidad de conocer e interpretar las acciones e intenciones de la otra parte. Los dos mencionados episodios no sólo provocaron crisis diplomáticas importantes, sino que también erosionaron claramente el modo en el que se había gestionado el conflicto desde principios de los años setenta. Durante décadas, el acuerdo tácito entre ambos Gobiernos consistía en postergar la resolución del conflicto (la decisión sobre la soberanía de las islas) y mantener el *statu quo* (gestión de las islas por parte de Japón, soberanía disputada) a partir de una diplomacia bilateral discreta e informal, de una política de no agresiones y no provocaciones y de unas relaciones cordiales al más alto nivel político. Así, en los últimos años se habían producido avances sustanciales para lograr algunos mecanismos de comunicación directa, la gestión y explotación conjunta de los recursos de la zona sobre la que existe disputa y la consideración del Mar de China Oriental como una región de "paz, cooperación y amistad", sin que ello implicara una renuncia a sus reivindicaciones de fondo respecto del contencioso. Sin embargo, las conversaciones y los acuerdos alcanzados quedaron abortados por el incidente naval de 2010 y por las movilizaciones de sectores en China que consideraban que su Gobierno estaba haciendo demasiadas concesiones.

La actual crisis se enmarca en las tormentosas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX. La invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial ha alimentado la animadversión entre ambos países en las últimas décadas. El hecho de que el Gobierno japonés no haya pedido perdón oficialmente por las atrocidades cometidas durante dicha invasión, así como las visitas de varios políticos a un templo en el que están enterrados algunos criminales de guerra japoneses, ha alimentado un sentimiento antijaponés que se halla bastante extendido entre sectores importantes de la población y que tradicionalmente ha sido alimentado por el enfoque dado en los libros de texto sobre la historia o por las proclamas emitidas desde círculos gubernamentales o medios de comunicación controlados por Beijing. Así, tal y como se demostró en las numerosas manifestaciones que se registraron en varias ciudades de China a raíz de la compra en septiembre de 2012 de tres islas por parte del Gobierno japonés a manos

24. Taiwán también mantiene reivindicaciones sobre la soberanía de las islas, pero hasta el momento no ha participado de manera directa en la escalada de la tensión política y militar en la región.
25. Véase el resumen de la tensión China-Japón en el capítulo 2 (Tensiones).
26. International Crisis Group, *Dangerous Waters: China-Japan Relations on the Rocks*, Asia Report no. 245, 8 de abril de 2013, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/245-dangerous-waters-china-japan-relations-on-the-rocks.aspx.

de un titular privado o de la visita en el año 2013 del primer japonés al templo de Yasukuni, el contencioso sobre las islas Senkaku/Diaoyu tiene un elevado valor simbólico e histórico para muchos ciudadanos en China y, en ocasiones, comporta una presión añadida para que el Gobierno chino actúe con mayor firmeza y beligerancia en este contencioso con Japón.

Además del claro deterioro de las relaciones entre China y Japón por cuestiones históricas y por las mencionadas crisis diplomáticas recientes, otro factor que agudiza el potencial desestabilizador del contencioso es el contexto geoestratégico en el que éste se produce. Algunas de las variables más importantes son el propio valor geoestratégico, económico y simbólico de las islas Senkaku/Diaoyu, la existencia de otras disputas territoriales en la región, el hecho de que Taiwán también reivindique la soberanía de las islas, el rol que pueda desempeñar EEUU en la región, o las estrategias a corto y medio plazo de China y Japón para incrementar su influencia en Asia Oriental. En cuanto al primer aspecto, a finales de los años sesenta, un informe de Naciones Unidas sobre prospecciones hidrográficas y sísmicas señaló que la región podría albergar enormes reservas de hidrocarburos, tal vez comparables a las existentes en el Golfo Pérsico. En fechas parecidas, un informe del Gobierno japonés arrojó conclusiones similares. Según algunas informaciones de inteligencia de EEUU, el Gobierno de China –y también el de Taiwán– empezó a mostrar interés en las islas solamente tras la aparición de dichos informes. Desde el punto de vista geoestratégico, las islas Senkaku/Diaoyu son clave para garantizar la libertad de navegación en la región, el acceso al Océano Pacífico más allá de la primera cadena de islas que une el sur de la península coreana con las islas Filipinas, así como para el control de las actividades militares que llevan a cabo Japón y EEUU en la prefectura de Okinawa.

El hecho de que tanto Japón como China tengan varias disputas territoriales con distintos países de la región hace que ambos países se sientan interpelados a demostrar fortaleza diplomática y militar en la gestión de las mismas. Según fuentes de ambos Gobiernos, hacer concesiones en el caso de las islas Senkaku/Diaoyu enviaría señales erróneas a otros países de la región y crearía un precedente peligroso. En este sentido, algunos análisis han apuntado a la posibilidad de que China esté sobredimensionando públicamente su interés por las mencionadas islas para atraer a Japón y EEUU a la mesa de negociación y lograr un acuerdo tácito por el cual Beijing abandonaría sus pretensiones de alterar el *statu quo* de los últimos cuarenta años en las islas Senkaku/Diaoyu y a cambio obtendría el apoyo de Japón (y la neutralidad de Washington) en sus disputas bilaterales con países como Vietnam, Malasia o Filipinas en el Mar de China Meridional. En tal hipotético escenario, el poderío económico, político y militar de China frente a sus países vecinos haría prevalecer los intereses de China en una región, el Mar de China Meridional, que según algunos análisis tiene mayores recursos fósiles que el Mar de China Oriental y sería el principal objetivo estratégico de Beijing a medio plazo.

Otro factor que añade complejidad geoestratégica e incertidumbre militar es la eventual implicación de EEUU en el contencioso en virtud del los acuerdos de defensa recíproca que mantiene con varios países de la región y, especialmente, con Japón desde 1960. Por tanto, un eventual incidente que afectara a territorio japonés podría obligar a Washington a intervenir y desencadenar una crisis entre EEUU y China, dos países que en los últimos años han manifestado con palabras y hechos su intención de incrementar su influencia en Asia Oriental. Algunos analistas consideran que uno de los objetivos de las últimas acciones de Beijing es tratar de calibrar la solidez de las relaciones político-militares entre EEUU y Japón y de intuir hasta dónde sería capaz de llegar Washington en cumplimiento de las obligaciones del tratado bilateral. Otros analistas y algunas voces influyentes en Beijing consideran que EEUU está utilizando la actual crisis entre Japón y China para incrementar su presencia en Asia y contener la expansión de China, tras algunos años en los que su implicación en escenarios como Iraq, Afganistán, Irán o Siria habría dificultado a la administración Obama dedicar a Asia Oriental la importancia que había anunciado. Desde esta perspectiva, el actual contencioso sobre las islas Senkaku/Diaoyu sería solamente uno de los múltiples frentes en los que se dirime la rivalidad entre China y EEUU por la hegemonía en la región y en el mundo. Por otra parte, cabe señalar que Taiwán también mantiene reivindicaciones territoriales sobre las islas Senkaku/Diaoyu y en los últimos años ha auspiciado o autorizado la navegación de barcos pesqueros o la presencia de activistas en la región.

Probablemente, uno de los aspectos más determinantes a la hora de valorar la posible evolución de la crisis y las perspectivas de una solución diplomática a la misma son las estrategias a corto y medio plazo de China y Japón para garantizar y incrementar su influencia en la región. Ambos países han sido acusados en varias ocasiones de basar sus estrategias de afirmación y expansión regional en el militarismo y el nacionalismo. En cuanto a Japón, cabe destacar la reciente aprobación de una nueva estrategia de seguridad nacional que incluye el mayor incremento del gasto militar en dos décadas, la eliminación de algunas de las restricciones legales y constitucionales en materia de defensa introducidas tras el fin de la segunda guerra mundial (como las restricciones en el uso de tropas en el extranjero), el fortalecimiento de las relaciones de defensa con EEUU y de cooperación militar con países que también tienen contenciosos territoriales con China, el aumento de la vigilancia aérea y marítima, o el incremento de la capacidad de respuesta rápida en la defensa del territorio, las aguas territoriales y el espacio aéreo de Japón. Uno de los objetivos de la nueva estrategia de seguridad nacional sería contrarrestar el expansionismo de China en la región y la amenaza nuclear de Corea del Norte, pero China y varios países de la región (especialmente Corea

del Sur u otros que mantienen disputas territoriales con Japón) han expresado su preocupación por esta nueva estrategia y por algunos de los gestos protagonizados por el Gobierno japonés, como la visita del primer ministro Shinzo Abe al templo de Yasukuni.

En cuanto a China, algunos analistas consideran que la creciente fortaleza de su posición geopolítica y económica en el sistema internacional auspicia una estrategia más agresiva de expansión de su influencia en Asia Oriental. En cuanto al contencioso concreto con Japón, la compra de las islas por parte del Gobierno nipón propició una oportunidad idónea para poner en práctica la denominada "asertividad reactiva", una estrategia que ya había practicado en anteriores ocasiones con Filipinas y Vietnam y que consiste en utilizar una acción unilateral y supuestamente provocadora de la otra parte para justificar no solamente una respuesta adecuada a dicha acción, sino una estrategia de alteración de un estatus quo que no le parece justo o no le conviene. En el caso particular de las Senkaku/Diaoyu, la reacción de Beijing consistió no solamente en hacer declaraciones de condena, cancelar visitas y reuniones, instigar protestas y boicots comerciales por parte de la población china, o incrementar los ejercicios navales en la región. Seguramente el hecho más importante fue el establecimiento de líneas de base (a partir de las cuales se delimitan las aguas territoriales) alrededor de las islas. Según algunos análisis, el objetivo de dicha acción sería oficializar y elevar el perfil político sus reivindicaciones y lograr un solapamiento de facto en el control de las aguas que rodean a las islas. Así, Beijing se sentía legitimado para incrementar el patrullaje de sus barcos en la zona para garantizar su jurisdicción en la región y pasaba a considerar cualquier navegación de navíos japoneses en la zona como una intrusión en territorio chino y una violación de su soberanía nacional. En este sentido, algunos analistas consideran que Beijing descarta que la disputa se dirima a través de un arbitraje internacional como la Corte Internacional de Justicia, bien porque es consciente de que sus reivindicaciones sobre las islas tienen un menor sustento en el derecho internacional que las de Japón o bien porque considera que tiene mayores probabilidades de lograr sus objetivos geoestratégicos utilizando su poderío económico, militar y político.

En resumen, la actual disputa entre China y Japón no solamente podría desembocar en un incidente militar, sino en una creciente inestabilidad en la región que comporte una creciente sensación de inseguridad y en una carrera armamentística en Asia Oriental. En este sentido, en ASEAN ya ha empezado a reflejarse una cierta división a partir de las alianzas militares y diplomáticas de los países de la región que mantienen sólidas relaciones político-económicas con China y de aquellos que tienen contenciosos territoriales con ésta y, por tanto, son susceptibles de conformar un frente estratégico con Japón. A pesar de los intensos lazos comerciales y económicos que unen a China y Japón, actualmente las perspectivas de canalizar la crisis diplomáticamente se hallan hipotecadas por la erosión de los mecanismos de comunicación y los canales tradicionales de resolución de disputas y por las aspiraciones de ambos Gobiernos de consolidar e incrementar su influencia en la región.

6.8. El diálogo Turquía – PKK, entre la crisis interna turca y la inestabilidad regional

El reinicio del diálogo a finales de 2012 entre Turquía y el grupo armado kurdo PKK generó grandes expectativas en 2013 entre gran parte de la población kurda de Turquía. Los kurdos, principal minoría étnica del país (15-20% del total de la población) han sido objeto de discriminación histórica en todos los ámbitos. Desde 1984 el grupo armado kurdo PKK mantiene una guerra contra Turquía, inicialmente en demanda de la independencia del Kurdistán y desde los años noventa con demandas de autonomía y derechos dentro de Turquía y que acumula un legado de unas 40.000 víctimas mortales. El reinicio de las conversaciones de paz entre 2012 y 2013, tras la ruptura del llamado diálogo de Oslo en 2011, suponía un nuevo intento de resolución a través del diálogo directo entre los servicios de seguridad (MIT) y el líder del PKK encarcelado desde 1999, Abdullah Öcalan. No obstante, diversos elementos de carácter interno y regional arrojan gran incertidumbre sobre las perspectivas del diálogo en el futuro inmediato y llevan a alertar sobre los riesgos de que se pierda una oportunidad más de solución y, con ello, se perpetúe un conflicto aún alimentado por la desconfianza entre las partes, el legado de trauma y la disponibilidad de recursos materiales y humanos para la continuación de la guerra. Entre los factores actuales de crisis sobresale la fragilidad del propio proceso de diálogo y el antagonismo crónico entre las partes, la crisis interna en Turquía y el calendario electoral, y el contexto regional, en el que la rama siria del PKK lidera en ese país un proceso de autogobierno en medio de una grave guerra.

En clave interna, desde que se reanudó el diálogo ha habido voces que han alertado sobre la fragilidad del proceso. Éste está estructurado sobre conversaciones periódicas entre sectores del Estado, principalmente el MIT y Öcalan. También participa el partido pro-kurdo BDP a través de visitas periódicas autorizadas a Öcalan, con el fin de hacer de enlace entre Öcalan y los cuadros político-militares del PKK. Las voces de alerta han advertido sobre los riesgos de un proceso sin niveles suficientes de confianza entre las partes, ausencia de una hoja de ruta clara, canales de comunicación frágiles (ej. comunicación indirecta entre Öcalan y los mandos del PKK; tensión con el Gobierno sobre la composición de las delegaciones del BDP), unilateralismo y falta de consultas sustantivas e incertidumbre sobre los compromisos, entre otros elementos. Así, pese a los avances de la primera mitad del año (ej. alto el fuego unilateral del PKK y comienzo de retirada de sus fuerzas de Turquía al norte de Iraq, especialmente), las acusaciones mutuas sobre incumplimiento de compromisos y falta de respuesta a demandas hicieron incrementar la tensión y llevaron al proceso al estancamiento, con amenazas de ruptura. Entre otras consecuencias, el PKK paralizó su retirada de fuerzas. Convergen así la propia fragilidad metodológica del proceso con elementos de fondo de posiciones y actitudes aún muy confrontadas: desconfianza, agravios y recelos sobre demandas que aún son tabú (ej. educación pública en lengua materna, autonomía) o sobre la ambigüedad gubernamental.

A todo ello se añaden importantes factores coyunturales que contribuyen a ahondar la fase de estancamiento actual. En el plano interno sobresalen el ciclo electoral turco 2014-2015 y la crisis gubernamental que vive Turquía. El país celebra elecciones locales en marzo de 2014, presidenciales en el mes de agosto y parlamentarias en el año 2015. Como en etapas anteriores, la cercanía del ciclo electoral ralentiza las iniciativas de paz en marcha y endurece las posiciones respectivas. En ese contexto pre-electoral se enmarca el último paquete de reformas democratizadoras anunciado en 2013, considerado por el movimiento nacionalista kurdo como muy insuficiente y sin consultas suficientes con las partes afectadas. A su vez, la visita conjunta del presidente del Gobierno Regional del Kurdistán (Iraq), Massoud Barzani, y el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en noviembre de 2013 a la capital simbólica kurda de Turquía, Diyarbakir, fue cuestionada por el BDP por asemejarse a un acto electoral, pese a que ambos líderes llamaron a la solución del conflicto kurdo en Turquía y pese a que Erdogan visitó por vez primera el ayuntamiento local, gobernado por el BDP. El partido gubernamental AKP y el BDP (y la nueva formación vinculada al BDP, HDP) compiten por votos en el sudeste de Turquía, en un contexto de dispersión del voto kurdo aún si con un fuerte respaldo al movimiento nacionalista kurdo. Por otra parte, también en clave interna, la guerra política desatada entre el AKP y el movimiento de inspiración religiosa Hizmet, liderado por el teólogo musulmán Fetullah Gülen, puede repercutir también en el proceso de diálogo. La pugna de poder entre ambos escaló de manera más directa a raíz del escándalo de corrupción destapado en diciembre, supuestamente por Hizmet. Según analistas y prensa local el movimiento tendría un amplio número de simpatizantes en la Policía y en los órganos de Justicia. En lo que respecta a la cuestión kurda, algunos analistas atribuyen al AKP una aproximación más favorable a la negociación con el PKK frente a la de Hizmet, que priorizaría destruir al grupo

El ciclo electoral en Turquía, la crisis interna entre el Gobierno y el movimiento Hizmet y factores regionales han añadido incertidumbre al diálogo de paz con el PKK

armado.[27] Así, la pugna entre AKP y Hizmet podría impactar en una dirección aún incierta en el nuevo escenario político que resulte del ciclo electoral y, a su vez, en el proceso de diálogo con el PKK.

Desde una mirada regional, la cuestión kurda de Turquía se ha visto influida también por la guerra en Siria y los acontecimientos en las áreas kurdas de ese país. Allí, un grupo considerado como la rama local del PKK, el PYD, ha puesto en marcha un proceso de autogobierno en áreas kurdas –enclaves discontinuos al norte del país–, mientras su milicia, YPG, se ha visto cada vez más envuelta entre 2012 y 2013 en las dinámicas bélicas del país, con enfrentamientos con diversos actores armados, incluyendo los grupos yihadistas Frente al-Nusra y el ISIS. Para Turquía, la emergencia de áreas autónomas kurdas añade presión a su propia cuestión kurda, caracterizada también por demandas de descentralización y autogobierno. Además, el hecho de que esas nuevas áreas autónomas estén bajo control directo (o indirecto) de quien ha sido históricamente el principal enemigo de Turquía, el PKK, añade incertidumbre y mayor grado de desconfianza en las relaciones entre Turquía y el PKK. Aún así, Turquía ha mantenido abiertos canales de diálogo con el PYD. Para el PKK, garantizar la supervivencia de esa nueva experiencia de autonomía en Siria ha pasado a ser un tema de gran prioridad en su agenda regional, como lo es presentar al PYD como un actor legítimo internacionalmente. Y en ese contexto ve con desconfianza el alineamiento de Turquía con el líder kurdo iraquí Barzani, principal promotor del actor rival del PYD en Siria, el KNC –una coalición de 16 partidos kurdos sirios, la mayoría con escasa base social, frente al carácter de partido de masas que ha adquirido el PYD. El PKK y el partido de Barzani, el KDP, compiten por el liderazgo kurdo en la región, mientras Turquía y el KDP han desarrollado estrechas relaciones políticas y, sobre todo, económicas en los últimos años, dejando atrás su antagonismo anterior. Por todo ello, el factor regional ha sido motor de tensión y mayor desconfianza entre Turquía y el PKK.

La tensión vivida en la segunda mitad del año llevó a una escalada de la retórica. Algunos analistas señalaron que el alto el fuego del PKK podría mantenerse en vigor durante el periodo electoral para facilitar el respaldo al movimiento nacionalista kurdo, mientras otros pusieron énfasis en los riesgos de una eventual ruptura del alto el fuego. En todo caso, el endurecimiento de posiciones previsible en una etapa electoro you tal podría llevar a presiones hacia mayores demostraciones de fuerza y, eventualmente, suponer riesgos de incidentes futuros si el proceso de diálogo no avanza. Como contrapeso, los mecanismos de comunicación seguían activos a finales de 2013 y diversos elementos que habían contribuido a la reanudación del diálogo seguían vivos, como la aceptación del diálogo y las reformas de democratización como vía para solucionar el conflicto; la aceptación de que la población kurda ha sufrido discriminación histórica; o la fatiga de unos y otros de la violencia, lo que facilita acercamientos en etapas de alto el fuego. En definitiva, se hace necesario redoblar los esfuerzos de acompañamiento a los actores locales y llamamiento a los pasos adecuados para mantener el clima favorable al diálogo y a una solución negociada al conflicto, con el fin de evitar que los riesgos y estancamiento actuales deriven en violencia y en mayor antagonismo.

27. Wladimir Van Wilgenburg, "Turkey's power struggle affects Kurdish issue", *Al-Monitor*, 9 de enero de 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/kurdish-turkey-gulen-power-struggle.html.